

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°039

Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **JHAMILTON VALENCIA HERRERA** contra la **CLÍNICA DE CIRUGÍA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A. EN PROCESO DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El demandante solicita que se condene a la sociedad demandada al pago de las acreencias laborales reconocidas en liquidación final del **1 de septiembre de 2020**, en la que se reconoce la suma de \$14'038.615 y la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del CST.

Hechos

Laboró al servicio de la sociedad demandada desde el 13 de febrero de 2013 desempeñándose como auxiliar administrativo.

Este contrato fue terminado por el empleador sin justa causa el día 27 de agosto de 2020, procediendo el 1 de septiembre de ese mes a expedir liquidación final de prestaciones sociales e indemnización por despido injusto, estableciéndose como valor a pagar la suma de **\$14'038.615**.

La suma adeudada a la fecha no ha sido reconocida y pagada por la sociedad llamada a juicio, pese a que en múltiples oportunidades y a través de varios medios ha solicitado el pago de los mismos.

Contestación Clínica de Cirugía Ambulatoria Conquistadores S.A. en proceso de recuperación empresarial

La sociedad demandada respondió a la demanda indicando que son ciertos los hechos y que el pago de la cifra adeudada no ha sido posible debido a que por los efectos económicos derivados de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para reducir los contagios de COVID 19, vio su objeto social afectado y con ello su capacidad económica para satisfacer todo tipo de acreencias, situación que la llevó a acogerse a un proceso de recuperación empresarial.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepción la buena fe.

Sentencia de Primera Instancia

El Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **23 de enero de 2023**, condenó al empleador a reconocer y pagar la suma de **\$14'038.615** por concepto de liquidación final del contrato y la sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales desde la terminación del contrato de trabajo a razón de \$39.013 entre el 28 de agosto de 2020 y el 28 de agosto de 2022 y partir del 29 de agosto de 2022 a continuar pagando intereses moratorios sobre los valores adeudados por salarios y prestaciones sociales.

Como fundamento de su decisión el juez a-quo manifestó que de conformidad con el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia la exoneración de la sanción moratoria del artículo 65 del CST solo aplica a los supuestos de liquidación de las sociedades, sin que sea extenderse el mismo a los trámites de reorganización empresarial.

Esta decisión no la compartió la apoderada de la sociedad demandada, motivo por el cual la recurrió en los siguientes términos:

Recurso de apelación Clínica de Cirugía Ambulatoria Conquistadores S.A. en proceso de recuperación empresarial

La recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia en lo refiera a la imposición al pago de la sanción moratoria del artículo 65 del CST, toda vez que, esa sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11º

del Decreto 842 de 2020 se encuentra sujeta al proceso de reestructuración empresarial.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, no se presentaron alegaciones.

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso interpuesto, será: (i) Determinar si el ingreso del empleador en un proceso de recuperación empresarial genera la improcedencia de la sanción moratoria del artículo 65 del CST por el no pago de salarios y prestaciones sociales.

Pruebas relevantes

Previo a resolver, considera la Sala importante hacer las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrante en el expediente:

1. En liquidación final de acreencias realizada por el empleador **Clínica de Cirugía Ambulatoria Conquistadores S.A.** se reconoció crédito en favor del señor **Jhamilton Valencia Herrera** por la suma de **\$14'038.615** por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnización por despido injusto (02/pág.30).
2. Según se observa en el certificado de existencia y representación de la sociedad demandada esta fue admitida en proceso de recuperación empresarial desde el 18 de mayo de 2021 (2/pág.10).

Efectuadas las anteriores anotaciones procederá la Sala a resolver el problema jurídico puesto en su conocimiento.

De la procedencia de la sanción moratoria del artículo 65 del CST

La apoderada de la sociedad demandada solicita que se le absuelva del reconocimiento y pago de la sanción moratoria impuesta por el juez de primera instancia, bajo el argumento de que al tratarse de una sociedad en proceso de reestructuración no le debe ser aplicada en forma irrestricta la consecuencia establecida en el artículo 65 del CST, en la medida que se reconoce la existencia de un crédito, pero la imposibilidad para satisfacerla de forma inmediata.

Referente al argumento presentado por la recurrente, se advierte es que el contrato de trabajo del demandante finalizó el **27 de agosto de 2020** (02/pág.29), y que posterior a esta fecha, la sociedad demandada en liquidación fechada del **1 de septiembre de 2020** (02/pág.30) reconoció la existencia de una liquidación en su favor por la suma de **\$14'038.615** (que incluye salarios y prestaciones sociales) valor que a la fecha de presentación del proceso judicial no había sido satisfecho.

En ese sentido es evidente que se cumplen los dos primeros presupuestos para la procedencia de la sanción moratoria reclamada, esto es, la terminación del contrato y que luego de la misma se adeuden salarios y prestaciones debiendo entonces revisarse el elemento subjetivo del empleador y para este efecto debe recordarse que es al empleador moroso a quien corresponde demostrar unas razones satisfactorias y justificativas de su conducta, premisa explicada por la jurisprudencia especializada bajo el concepto de *buena fe liberatoria*, siendo en este aspecto bastante ilustrativa la sentencia radicado 25172 de 2006, en la que la Corte Suprema de Justicia, dijo lo siguiente:

Ahora bien, esa buena fe liberatoria de la sanción por mora, surgida por el no pago oportuno de las acreencias laborales, también se ha dicho (sentencia del 6 de febrero de 1991, Rad. 4119), debe ser probada por el patrono deudor mediante la aportación de pruebas o aducción de razones atendibles que permitan inferir, como se dijo, que su actitud de renuencia a la satisfacción de los créditos, una vez extinguido el contrato de trabajo, se halla despojada de malicia.

En lo que respecta al caso de autos, la apoderada de la sociedad demandada aduce que la empresa no estuvo en posibilidad de satisfacer los créditos laborales de su trabajador por que debido a los efectos generados por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar el contagio de Covid 19 se vio en una difícil situación económica, sin embargo, esta manifestación por sí sola no es una causal para la exoneración, por cuanto se debe recordar que según lo enseñado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, las condiciones de crisis económica por las que atraviase la empresa no puede ser una causa para desconocer los derechos de los trabajadores, puesto que existe en materia laboral el principio de la ajenidad del riesgo (art.28 CST), según el cual las pérdidas en la gestión del empleador no puede ser trasladada al trabajador.

Sobre este punto existe un nutrido precedente jurisprudencial del que se cita la Sentencia SL-845 de 2021, en la que al respecto se dijo:

Por anticipado, se advierte que la censura tiene razón cuando asevera que el ad quem desacertó al concluir que la crisis financiera de la empresa constituye por sí sola una conducta justificante del impago de los salarios y prestaciones. En efecto, esta Corporación tiene adocinado que dichas situaciones no exoneran de la de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que es necesario que el empleador demuestre que esa circunstancia le produjo una insolvencia o iliquidez tal que le impidió cumplir con sus obligaciones laborales.

Ahora, podría indicarse por parte de la demandante que la crisis económica generada por el COVID 19 es una situación sin precedentes que no puede analizarse a la luz de los precedentes anteriores a su ocurrencia, sin embargo, esta tesis da al traste con la actitud despreocupada y evasiva del deudor, en este caso que ante las múltiples reclamaciones del trabajador nunca propuso un acuerdo para satisfacerlas, dando soluciones unilaterales y evasivas, que por lo demás tampoco demostró cumplir, pudiendo consultarse en este sentido la respuesta ofrecida el 8 de enero de 2021 –casi 4 meses después de terminado el contrato de trabajo- en la que expresó (02/pág.32):

Cordialmente nos permitimos informarle que la Clínica Conquistadores S.A. en la actualidad se encuentra en la Construcción y ejecución de nuevos proyectos que permitan la sostenibilidad financiera.

Por lo anterior me permito indicar que a partir del mes de marzo la Clínica Conquistadores S.A. realizara abonos en 8 cuotas para cumplir con las acreencias totales pendientes de las suscritas en la referencia.

A partir de lo anterior es evidente que no puede encontrarse buena fe en el actuar de la sociedad demandada por lo que es procedente la condena impuesta por el juez a-quo desde el **28 de agosto de 2020**, día siguiente al de la terminación del contrato de trabajo.

De otro lado, se propone por parte de la recurrente la tesis de que al tratarse de una empresa en proceso de reestructuración, no es posible imponerle la sanción consagrada en el artículo 65 del CST, aspecto que es necesario revisar realizando una claridad y es que según consta en el certificado de existencia y representación de la demandada, el proceso adelantado por esta sociedad ante la Cámara de Comercio de Medellín fue el de recuperación empresarial, trámite creado por el Decreto 560 de 2020 que tenía como finalidad “*la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo...*” y que para tal objetivo permitió que los empresarios a través de unos procedimientos expeditos llegar a acuerdos con sus acreedores para la satisfacción de los créditos sin ver

afectado su funcionamiento, los cuales serían llevados a cabo por un mediador (art.9), permitiéndose además que en desarrollo del mismo se pagara a los acreedores laborales por fuera del acuerdo con la finalidad de no generar una gran afectación (art.3).

Lo expuesto en el párrafo anterior es de gran importancia, puesto que, las características especiales de este procedimiento lo diferencian en un aspecto fundamental con el de reestructuración de la Ley 1116 de 2007 y el de liquidación y es que en este caso el empresario busca mediante un acuerdo con los deudores mantener la unidad de explotación por lo que no pierde el manejo económico de la empresa- pudiendo incluso satisfacer los créditos laborales de personas no vinculadas (art.3, Decreto 560 de 2020), entre tanto los otros un agente estatal desplaza al empresario para cumplir con la satisfacción de unas obligaciones con el patrimonio existente.

La diferencia en cuanto a la administración, genera entonces un elemento que hace que no sea aplicable a este caso el precedente que respecto de empresas en reestructuración y liquidación ha enseñado la Sala Laboral de la Corte de Justicia entre muchas otras en las sentencias SL-16280 de 2014, y SL-1595 de 2020, pues se reitera el empleador nunca perdió el manejo económico de la sociedad.

Ahora, bien se podía dentro del trámite adelantado ante la Cámara de Comercio que por lo demás tiene una duración de 3 meses suscribir acuerdos en cuanto a la forma en que se pagarían las acreencias del trabajador, pero en este caso nuevamente se encuentra ausente la prueba de la parte de la demandada, sin que por lo demás en caso de su no asistencia se demostrara que el acuerdo suscrito con otros acreedores fue presentado ante el juez para que lo validara extendiendo sus efectos a quienes se abstuvieron de participar en la mediación (art.9 Decreto 560 de 2020).

En ese orden, al encontrar que el empleador luego de la terminación del contrato de trabajo no atendió los llamados de su trabajador para el pago de sus salarios y prestaciones sociales y que en el transcurso del proceso no se demostró por parte del empleador la existencia de una buena fe liberatorio o de una situación que lo marginara del manejo de sus finanzas es procedente la sanción moratoria en los términos establecidos por el juez a-quo, por lo que se **confirmará** el fallo apelado.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de la **Clínica de Cirugía Ambulatoria Conquistadores S.A. en proceso de recuperación empresarial**, por haberse confirmado en su integridad la decisión apelada (num.4 art.365 CGP). Las

agencias en esta instancia en favor del demandante se fijan en la suma de **\$1'160.000.**

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia proferida por el Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el día **23 de enero de 2023**, en el proceso ordinario laboral adelantado por el señor **JHAMILTON VALENCIA HERRERA** contra la **CLÍNICA DE CIRUGÍA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A. EN PROCESO DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL.**

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la **CLÍNICA DE CIRUGÍA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A. EN PROCESO DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL.** Las agencias en esta instancia en favor del demandante se fijan en la suma de **\$1'160.000.**

Lo resuelto se notifica por **EDICTO.**

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Jhamilton Valencia Herrera
Demandado	Clínica de Cirugía Ambulatoria Conquistadores S.A. en proceso de recuperación empresarial
Radicado	05001-31-05-014-2021-00251-01
Decisión	Confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 31 de marzo de 2023 a las 8:00am

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 31 de marzo de 2023 a las 5:00pm